



INSTITUTO POPULAR
DE CAPACITACION

por la VIDA

BOLETIN DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y DERECHOS HUMANOS

PRESENTACION

En esta oportunidad comentamos hechos que enmarcan el panorama de la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Pocos días antes de esta edición, el gobierno decretó el estado de conmoción interna y sucedía la fuga de Pablo Escobar.

La corrupción, la privatización y los diálogos de paz, si bien, no tocan directamente con los derechos humanos, si tienen que ver con el desenvolvimiento de ellos, y nos ayudan a conformar el prisma político, social y económico del país.

Agradecemos el apoyo y la acogida brindada al boletín de prueba, editado en abril de este año. Este es un esfuerzo por lograr espacios de información sobre la problemática de los derechos humanos y de los pueblos.

Estamos atentos a recibir sugerencias y nuevas suscripciones.

En el primer semestre de este año han proliferado, a través de los medios masivos de información, una gran cantidad de "noticias" sobre el fenómeno de la corrupción en la administración y gestión del Estado.

Según la Asociación Colombiana de Administradores Públicos (A.C.A.P.), "a lo largo de los dos últimos años se han desarrollado cerca de dos mil indagaciones por el pre-

sunto delito de enriquecimiento ilícito por parte de altos funcionarios", aunque los casos juzgados no superan los cien.

Por otro lado hemos sido testigos del "estira y encoge" entre Congreso, Veedor del Tesoro Nacional y Procurador por el asunto de los llamados auxilios parlamentarios. Al respecto Juan Diego Jaramillo, columnista del diario El Tiempo, en la edición de junio 13 dice: "Si los periodistas investigaran un poquito más, encontrarían todas las fundaciones políticas del Congreso Colombiano, engulléndose más de 50.000 millones de pesos entre el segundo semestre del 91 y el primer trimestre del 92". Ni qué decir del mentado caso del exalcalde de Santa Fé de Bogotá, Juan Martín Caicedo Ferrer y sus concejales, sobre los cuales pesa una investigación por el mismo concepto. ¿Será que ha empezado, de verdad en Colombia, una ola moralizante en el manejo del Estado?

Colombia es un país de profundas desigualdades económicas, sociales y culturales. El régimen político, construido en esta realidad, se ha estructurado sobre la base del clientelismo y el autoritarismo. Con la mediación de los partidos tradicionales, el clientelismo, se convirtió en la relación social dominante, a través de la cual el Estado integraba diversas expectativas sociales; o mejor, aquellas que fueran posibles, las que no, simplemente han sido excluidas o reprimidas.

Lo anterior trajo como consecuencia el desarrollo de multitud de prácticas y costumbres que desembocaron en una situación de corrupción generalizada. La política, para el común de la gente es vista como negociado. Dicha práctica se ha extendido incluso a toda la sociedad. La "viveza", el codazo y la zancadilla son el pan de cada día; se destruye así el tejido social y se contribuye a la desintegración cultural.

Corrupción y violencia son hermanas gemelas. El clientelismo es, por definición, una práctica que a la vez que aglutina una porción del país, margina a la otra: la condena al

CORRUPCION Y REGIMEN POLITICO

silencio. Así mismo, la impunidad se vuelve consustancial a un régimen de este tipo. Por lo tanto corrupción, violencia e impunidad han devenido estructurales a nuestra realidad social y política.

Pero como "no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista", el régimen político colombiano entró en crisis. Ante las exigencias del capitalismo internacional, la crisis económica interna y la

agudización del conflicto social y político, se hizo necesaria la recomposición de tal régimen. Y este es el proceso por el cual atraviesa la realidad política de nuestro país.

Dicha recomposición se desarrolla en un marco de represión y desorganización de los sectores sociales más radicalizados, y del intento de cooptar a sectores moderados y algunas capas medias. En este contexto las élites dominantes pretenden limpiarse la fachada y establecer nuevas reglas de juego, para seguirse repartiendo el poder.

Por esto, los intentos de condenar a los corruptos, hasta ahora, no han sido sino eso: Intentos. En ese campo todos los políticos tienen "rabo de paja". Es diciente la lista que hizo pública el Veedor del Tesoro Nacional sobre quienes estaban comprometidos con la entrega de "auxilios" a través del Ictetex: allí aparecen todos los políticos profesionales de este país. Por lo mismo, es diciente también, la "enmochilada" del asunto.

La recomposición aún no ha terminado. La puja entre quienes piensan que se debe controlar el clientelismo, "modernizar" al país, y quienes quieren continuar como antes, sigue.

La corrupción no sólo es un problema moral sino político y estructural; por lo tanto, su erradicación demanda cambios sustanciales y para ello es necesario construir una sociedad participativa.

O sea, es imprescindible que los sectores democráticos y populares efectivamente participen en el manejo de los destinos de la nación. Y no estamos hablando de ese tipo de participación, tan pregonada hoy día. Esa que simplemente se limita a la información y a la consulta, que constituye sólo su nivel primario, es decir, que implica únicamente cooptación e integración; hablamos de aquella participación que significa decisión y gestión, vale decir intervención. Para ello la sociedad le debe quitar el monopolio de la política y del manejo de la decisión y gestión pública a los políticos profesionales.

Treinta años de guerra de guerrilla en Colombia son un peso oneroso en exceso para los bandos en pugna. Porque ninguno de los dos (Ejército e insurgencia) han logrado dar al otro golpes de alguna manera definitivos (victorias estratégicas).

Pero ésto parecen olvidarlo tanto el gobierno nacional como la CGSB cuando se sientan a la "mesa de conversaciones", siempre con el ánimo de vencer al contrario como no han podido hacerlo en el campo de batalla. Uno y otro bando buscan, además, llegar con una posición militar fuerte a las negociaciones; para ello desarrollan múltiples ofensivas con los ya conocidos costos económicos y sobre todo humanos que acarrea la guerra en Colombia.

Pero tal vez la más grave consecuencia resulta cuando, debido a la ceguera de los negociadores, se rompen o se suspenden los diálogos. Pasa que los sectores más recalcitrantes de esta sociedad salen a dominar la escena, dando la sensación de que el único camino es el exterminio del otro bando, de que la tan esquiva victoria militar es posible.

Hoy, con las negociaciones suspendidas, el gobierno colombiano parece más decidido que nunca por la opción militar. Con este fin esperan a través de la reforma tributaria, recaudar 275.000 millones de pesos destinados únicamente para la guerra. Necesitan, además aclimatar la paz rápidamente, desmovilizando a los alzados en armas, para darle seguridad a la tan esperada inversión extranjera, que es según el gobierno, motor impulsor del desarrollo económico. Pero tres factores le impiden asumir seriamente el reto de la paz:

1. La verticalidad en la que el gobierno se empeña, al mantener una línea no susceptible de variarse a pesar de las manifestaciones que la sociedad civil y otros sectores del Estado hacen a favor de que se dé una mayor participación social en los diálogos y se permitan los famosos diálogos regionales. No escucha opiniones distintas a las que lo apoyan ciegamente o las que sólo ven viable la opción militar, la cual es en el fondo su credo.
2. La situación de DDHH es francamente preocupante: las denuncias de la población afectada por la acción del

ejército y la policía se cuentan por miles; las brigadas móviles son instrumento de terror; los bombardeos absolutamente indiscriminados, las ejecuciones extrajudiciales se cuentan por centenares. No existe el menor indicio de que esta actitud cambie, ya que el discurso del gobierno y su consejería de DDHH es totalmente simbólico. Somos como un país ocupado.

3. La crisis política y social es grave; el gobierno, a dos años de su llegada al poder y después de la apoteosis de la Constituyente, se encuentra atrapado. Porque es muy notoria la erosión de su popularidad debido a la celeridad y desorden del programa económico neoliberal. Por otro lado, las instituciones de elección popular siguen prisioneras del clientelismo bipartidista y de otros de "nuevo" cuño.

Pero la insurgencia también está sometida por sus proble-

mas internos: en primer lugar asistimos al espectáculo de una guerrilla dividida entre un sector fanáticamente militarista y otro sector -lamentablemente minoritario- con una visión global de las posibilidades de una salida negociada.

Otro problema es el de la crisis ideológica de la izquierda que no ha podido ser llenado suficientemente por el mantenimiento de esquemas reevaluables en muchos puntos.

La pregunta que muchos analistas se hacen hoy es el de la viabilidad del proyecto insurgente, tal como lo hemos conocido desde 1962, ante las realidades de los sectores más desprotegidos de la población y el nuevo milenio.

Estas preguntas son obviamente, largas y difíciles de resolver. Tal vez lo mejor es aterrizar un poco y ver las miles de víctimas que han caído y seguirán cayendo en esta guerra. Hoy, sólo es posible recobrar la esperanza de una paz con justicia y libertad y sobre todo con dignidad, llamando a todos los sectores sociales a la mesa de diálogo, propiciando y autorizando los diálogos regionales y por sobre todo, aceptando que mientras subsista el conflicto, ambas partes deben aceptar todas las normas nacionales e internacionales destinadas a proteger la vida y dignidad de la población civil.

Así, tal vez le demos un chance a la vida y tengamos la oportunidad de construir una sociedad nueva de hombres y mujeres libres.

DIALOGO DE CIEGOS

CRONICA DE UNA FUGA ANUNCIADA

Tres días después de que el Director Nacional de Prisiones

había asegurado a los reporteros del periódico más grande del país que "nada anormal sucede" en la Cárcel de la Catedral, Pablo Escobar y nueve de sus lugartenientes

burlaron un cerco tendido por más de 200 soldados, pasando por un hueco en la malla, y volaron a la libertad. Fue inesperado pero realmente no tan difícil de creer.

De igual forma, no sorprendieron del todo las revelaciones más recientes de que la cárcel de máxima seguridad contaba entre sus características con camas de agua, jacuzzis, sofisticados equipos de comunicación -fax y teléfonos celulares- y varias caletas de armas.

Lo anterior pone de relieve el fracaso de la política oficial de hacerse el ciego: confirma lo que muchos habían sospechado desde la entrega de Escobar a las autoridades, en junio del año pasado. Esta política "laissezfaire" de hacerse los de la vista gorda frente a las actividades ilícitas, mientras éstas no amenacen al poder y los privilegios de la élite política del país, no es nueva.

A finales de los años 70 y principios de los 80, por ejemplo, esa política facilitó el que Escobar y sus aliados consolidaran gran parte de su industria criminal y, continúa siendo hoy el factor que permite las actividades de los miembros del violento pero discreto cartel de Cali. De otro lado, grupos paramilitares, patrocinados y apoyados por el ejército, aprovecharon esta política, multiplicándose, estableciendo fortines y actuando con impunidad donde quisieron en el campo colombiano.

Frenar el narcoterrorismo y la violencia y no su producción y tráfico, es el interés primordial de sucesivos gobiernos. Por eso, poner a Escobar tras las rejas -independientemente de lo que haga estando ahí- ha sido el objetivo principal de la llamada política de sometimiento a la justicia, de la administración actual. Ahora, con lo que el fiscal general califica como "pruebas irrefutables", que demuestran cómo Escobar no sólo seguía manejando sus negocios desde la cárcel, sino que era directamente responsable por una racha de secuestros y asesinatos en Medellín (ajustes de cuentas, según periódicos locales), durante el mes de junio, el gobierno colombiano, presionado por la DEA y la reacción internacional, se vió obligado a tomar la decisión de actuar en contra de Escobar.

Con este argumento se realizaron centenares de allanamientos y detenciones que han afectado a la población que se convierte en sospechosa y víctima.

Es difícil saber qué sucederá ahora. Son contradictorias las versiones sobre lo sucedido y sobre el vuelo de aviones con agentes y equipo norteamericano. Es posible otra ronda de negociaciones destinada a encarcelar de nuevo a Escobar, a no ser que la DEA y sus enemigos lo cojan primero.

Sin embargo, hasta que los EE.UU. y otros países consumidores no se planteen políticas que realmente controlen el consumo de droga, es de esperarse que docena de escobares anónimos continúen con el narcotráfico.

Las comunicaciones son hoy un sector estratégico

de la economía nacional que requiere contar con las tecnologías de punta en la informática y telemática, imprescindibles para la reconversión industrial y la transnacionalización a la que se aboca el país.

TELECOM UNA PIEDRA EN EL ZAPATO DE LA PRIVATIZACION

Hoy la mayoría de las subsidiarias de las transnacionales, de las grandes empresas del país, del sector financiero, del comercio exterior, se mueven con base en las comunicaciones. Telecom ha sido el vehículo que moviliza esa información tan vital para estas empresas. El paro de los trabajadores hizo resaltar la importancia de las comunicaciones, hasta tal punto, que se demostró que pueden vulnerar la economía. De allí que el gobierno habló de acabar con ese monopolio estatal para entregárselo a las multinacionales privadas y además de la necesidad de que existan siquiera dos sistemas para transmitir la información.

Los trabajadores vinculados a Telecom son hoy, los representantes de un nuevo proletariado con una composición donde tienen peso importante los técnicos e ingenieros. Son ellos quienes han enfrentado decididamente la privatización que amenaza a la empresa. Por ello realizaron un paro memorable que paralizó un gran conjunto de actividades en el país. El gobierno a su turno, polarizó a la opinión pública en contra de este sector.

La huelga no logró articular la lucha de los trabajadores contra la Apertura y la Privatización, desperdiándose así, un buen momento. En ello incidieron el reflujo por el que atraviesa el movimiento obrero y el aislamiento que han mantenido las organizaciones de los trabajadores de Telecom. Sin embargo, este conflicto logra el respaldo de sectores de opinión contra la privatización de esta empresa estatal, debido a que su rentabilidad es alta, además las experiencias similares en otros países latinoamericanos son poco halagadoras.

El conflicto logra ponerle obstáculos a la privatización de la empresa, pero ya se han dado pasos en la constitución de empresas mixtas con capital extranjero para la telefonía celular y además existe la decisión de constituir una red privada para la transmisión de información. Estos y otros elementos han llevado al sindicato en varias oportunidades a señalar que el gobierno incumplió los acuerdos.

Hoy se presenta una competencia internacional, entre monopolios, por el control de las comunicaciones en los diversos países. Se podría agregar que no es sólo entre empresas sino entre países que las apoyan y que buscan imponer sus condiciones y no el tan mentado reto de la eficiencia y el libre mercado.

La crisis que vive la educación en Colombia y en el Departamento de Antioquia se expresa, entre otros aspectos, en la mala calidad académica, en las deficiencias infraestructurales y en el deterioro de la relación profesor - alumno.

En Medellín, de 350 escuelas, sólo 50 están en buen estado, además de que el número de planteles es reducido para la demanda de la población en edad escolar. El auge de la política neoliberal ha determinado que el gobierno se lave las manos con la responsabilidad de la educación y opte por la privatización.

Surge así un nuevo foco de incertidumbre y conflicto social. Hasta ahora, ha existido déficit de cupos por falta de escuelas y colegios; con la privatización, las posibilidades de estudiar se reducen por el alto costo de la matrículas. En Medellín el gobierno quiere privatizar instituciones tan reconocidas como el Liceo Marco Fidel Suárez, el Pascual Bravo y la Universidad de Antioquia.

Es en este contexto, que la violencia se agudiza afectando al sector educativo. Desde años atrás, por la guerra sucia que nos azotó, se ha dado el asesinato paulatino de maestros, sólo en el año de 1987, en el Departamento de Antioquia, fueron asesinados 47 de ellos. A partir de 1989 aparece un nuevo tipo de violencia en el sector educativo, se presentan amenazas a educadores, entre otras causas, por la falta de cupos en los colegios.

Un problema estructural no resuelto por el Estado, se torna en un problema personal. El maestro aparece ante los jó-

PRIVATIZACION Y VIOLENCIA EN LA EDUCACION

venes como la persona que le niega el acceso al conocimiento, que le niega el cupo para estudiar, y contra él canaliza toda su rebeldía. Y no es que el joven, de por sí, sea violento. La violencia la genera el Estado al negarle un derecho fundamental, al negarle la posibilidad de estudiar y vivir dignamente, propiciando así condiciones para la descomposición social y cultural.

En Medellín varios planteles educativos han sufrido el ingreso violento de encapuchados que amenazan, destruyen la infraestructura y pintan grafitis. En otros casos los profesores reciben boletas y llamadas telefónicas amenazantes.

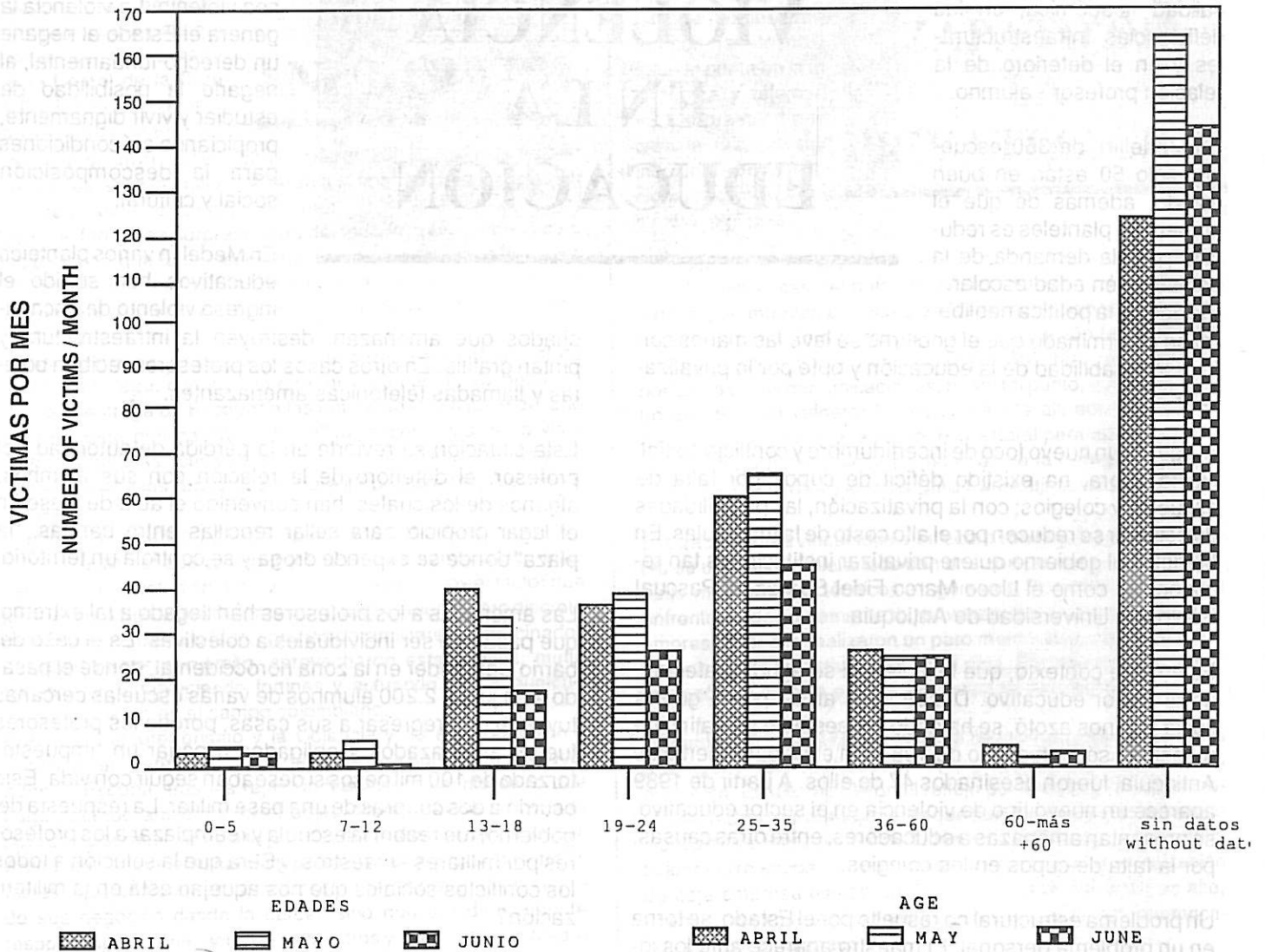
Esta situación se revierte en la pérdida de autoridad del profesor, el deterioro de la relación con sus alumnos, algunos de los cuales han convertido el aula de clase en el lugar propicio para sellar rencillas entre bandas, "la plaza" donde se expende droga y se controla un territorio.

Las amenazas a los profesores han llegado a tal extremo, que pasan de ser individuales a colectivas. Es el caso del barrio Santander en la zona noroccidental, donde el pasado 4 de junio, 2.200 alumnos de varias escuelas cercanas tuvieron que regresar a sus casas, porque los profesores fueron amenazados y obligados a pagar un "impuesto" forzado de 100 mil pesos si deseaban seguir con vida. Esto ocurrió a dos cuadras de una base militar. La respuesta del gobierno, fue reabrir la escuela y reemplazar a los profesores por militares - maestros. ¿Será que la solución a todos los conflictos sociales que nos aquejan está en la militarización?

“Y no es que el joven, de por sí, sea violento. La violencia la genera el Estado al negarle un derecho fundamental, al negarle la posibilidad de estudiar y vivir dignamente, propiciando así condiciones para la descomposición social y cultural.”

VIOLENCIA EN ANTIOQUIA

VICTIMAS SEGUN RANGO DE EDADES VICTIMS ACCORDING TO AGE



VICTIMAS SEGUN RANGO DE EDADES					VICTIMS ACCORDING TO AGE				
EDADES	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	AGE	APRIL	MAY	JUNE	TOTAL
0-6	3	4	3	10	0-6	3	4	3	10
7-12	3	4	1	8	7-12	3	4	1	8
13-18	39	32	15	86	13-18	39	32	15	86
19-24 años	36	38	25	99	19-24 years	36	38	25	99
25-35 años	58	66	44	168	25-35 years	58	66	44	168
36-60 años	26	25	25	76	36-60 years	26	25	25	76
Más de 60	5	2	3	10	+ 60	5	2	3	10
TOTAL	294	337	261	892	TOTAL	294	337	261	892



INSTITUTO POPULAR
DE CAPACITACION

for LIFE

HUMAN RIGHTS AND PEOPLES RIGHTS BULLETIN

INTRODUCTION

In this issue we take a look at several events, all of which are integral parts of the national human rights panorama. Not long before this issue went to press, the government declared the country in a 'state of internal commotion', one of the emergency 'states of exception' permitted by the new Constitution and Pablo Escobar escaped from prison.

Although official corruption, privatization and peace talks are not exclusively human rights issues, they do illustrate the way the understanding of these rights continues to develop and are, therefore, useful in helping us grasp the real dimensions of the country's political, social and economic crisis.

We wish to thank those people whose collaboration made our April issue a success.

We look forward to your continued support in this attempt to establish an alternative source of information about the country's human and peoples' rights situation.

Your suggestions and new subscriptions are welcome.



INSTITUTO
POPULAR DE
CAPACITACION

Dirección: Carrera 46 No. 61-62
Teléfonos: 2547065 - 2544115
Fax: 2545532
Apartado Aéreo: 9690
MEDELLIN - COLOMBIA

YEAR 1 #1 JUNE-AUGUST - 1992 - A.A. 9690 MEDELLIN - COLOMBIA

The educational crisis in Colombia and in the department of Antioquia is manifested in a number of ways: low academic standards, infrastructural deficiencies and a deterioration in the relationship between students and teachers, among others.

PRIVATIZATION AND VIOLENCE IN EDUCATION

see the teacher as the person responsible for denying them access to schooling and knowledge and, consequently, to channel all of their rebelliousness and hostility against him or her.

This is not to suggest that such youth are violent by nature; rather it is a violence which the State generates by

In Medellín, in addition to the fact that there are not nearly enough schools to meet the demands of the school-age population, only 50 of the city's 350 schools are in good working order.

The government, for its part, has washed its hands of all responsibility and, as part of the neo-liberal package of reforms it is implementing, has opted to privatize the country's educational system.

In this way, a new focus of uncertainty and social conflict has been created, and, although there have always been too few schools to meet the demand for education, the increase in registration fees such privatization entails will make it even more difficult for many to study. In Medellín, the government has already said it intends to privatize such well-known institutions as Marco Fidel Suarez and Pascual Bravo high schools and the University of Antioquia.

It is within this context that there has been an intensification of violence affecting the educational sector.

Such violence is not new. Since the mid 1980's, as part of the dirty war, there has been a steady increase in the number of teachers murdered each year; in 1989 alone, there were 47 such cases in Antioquia. A new kind of violence began in 1989, however, as teachers began to receive death threats for, among other reasons, schools' inability to accommodate all of those wishing to study.

It is in this way that a structural problem left unsolved by the State becomes a personal problem: young people begin to

denying young people a fundamental right -their right to study and live with dignity- Thus contributing to the social and cultural breakdown of society.

Armed groups of hooded individuals have forced their way into a number of the city's schools, threatening teachers and students, destroying school property and painting graffiti on the walls. In other cases, teachers receive threatening notes and telephone calls.

All of this results in teacher's loss of authority and the deterioration in their relationships with students, some of whom have converted the classroom into territory to be controlled and a place to sell drugs and 'settle scores' between gangs.

Such threats against teachers have reached such alarming proportions that, in some cases, they have gone from being individual to collective. On June 4, in the northwestern Medellín neighborhood (barrio) of Santander, for example, 2,200 students from a number of barrio schools were forced to return home after their teachers were told that if they did not pay a 'tax' of 100,000 pesos (\$165 dollars) they would all be killed.

This occurred two blocks away from a military base. The government's response was to re-open the schools and replace the teachers with military teaching personnel.

¿Could militarization really be the solution for all of society's social conflicts?



CUPON DE SUSCRIPCION PARA BOLETIN DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y DERECHOS HUMANOS

por la **VIDA**

Suscripción anual por 3 números

Precio de apoyo Resto del país: \$800

Medellín: \$600 Exterior: US\$ 5

Nombre: _____

Dirección: _____ Ciudad: _____

Departamento: _____ País: _____ Fecha: _____

Observaciones: _____

En Medellín o en el resto del país consignar en la cuenta No. 1033-1598640 de Conavi -Sucursal Villanueva- a nombre de la Corporación de Promoción Popular -I.P.C.-.

Para el exterior consignar para el Banco Cafetero de la Calle 49 #50-51 en Medellín, cuenta No. 265-09461-5 a nombre del I.P.C.

2 for LIFE

Thirty years of guerrilla war in Colombia is and onerous burden to bear for both sides in the conflict, given that so far neither of the two (army or insurgency) has been able to achieve strategic victories by inflicting any definitive blows on the other.

Both the government and the Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar -CGSB-, seem to forget this, however, when they sit down at the negotiating table as always, in the hopes of defeating at the table the enemy they could not defeat on the battlefield. In addition, because both want to arrive at the negotiations in a position of military strength, they carry out numerous military offensives with their inevitable economic and, above all, human costs, all of which are an integral part of the war in Colombia.

Perhaps the most serious consequence, however, occurs when because of the shortsightedness of the negotiators, the dialogues are suspended or break down and the country's most recalcitrant sectors take the stage, insisting that the elusive military victory is indeed possible and that the only solution is the extermination of the enemy.

Today, with the negotiations suspended, the government more than ever before, seems determined to go with the military option. To this end, it hopes

to raise over \$30 million dollars with its new tax reform and use it exclusively to fuel the war.

Peace in the near future and the demobilization of guerrilla forces is a necessity in order to ensure a secure environment for eagerly awaited foreign investment, which the government insists will propel the economic development of the country.

Three factors, however, prevent the government from seriously facing the challenge of peace:

1. The government's verticality in maintaining a rigid and inflexible position in spite of the support voiced by civilian society and other sectors of the population for a broader, social participation in the dialogues and the realization of the much debated regional dialogues. Opinions differing from those the government is blindly adhering to and those which consider the military the only viable option -at the root of the government's position -continue to fall on deaf ears.
2. The country's human rights situation continues to be worrying: denunciations of human rights abuses by those most affected by army and police actions number into the thousands; the army's mobile brigades are instruments of terror; aerial bombardments absolutely in-

discriminate and hundreds of extra-judicial executions continue to occur. Moreover, given that the position of both the government and its office for the defence and protection of human rights is totally symbolic, there is not the slightest indication that this attitude is likely to change. It is almost as if we were a country under siege.

3. The seriousness of the country's political and social crisis. Two years after assuming power and a year after the promulgation of the new Constitution, the government finds itself trapped. Its popularity has eroded considerably, due to the disorder of and excessive speed with which it is implementing its neo-Liberal economic program. Similarly, the popular election institutions continue to be prisoners of bipartisan patronage as well as other newer, but similar mechanisms.

The insurgency is also faced with a number of internal problems. In the first place, we are witnessing the spectacle of a guerrilla movement divided between a fanatical, milita-

ristic sector and another -unfortunalely in the minority- which has a global vision of the possibilities of a negotiated solution.

Another problem is an inability to overcome the ideological crisis of the Left, in part, by maintaining sche-

mes which are worthy of reappraisal and re-evaluation in many aspects.

Today, given the realities of the country's most vulnerable sectors and with a new century rapidly approaching, many analysts are asking whether or not the insurgency project, such as we have known it since 1962, is still viable.

Although these questions are obviously complicated and difficult to resolve, perhaps the best thing would be to stop for a moment and take a good look at the thousands of victims that the war has claimed and will continue to claim.

Only by convoking all of the country's social sectors to the negotiating table, authorizing and facilitating regional dialogues and, above all, for as long as the conflict lasts, having both sides agree to accept national and international norms intended to protect the life and dignity of the civilian population, can we hope to regain hope for a peace with justice, freedom and, above all, dignity.

Perhaps in this way, we can give 'life' a chance and, at the same time, have the opportunity to construct a new society of free men and women.

DIALOGUES: The Blind Leading the Bling

CHRONICLE OF A NOT ALTOGETHER UNEXPECTED ESCAPE

The fact that three days after Colombia's director of prisons assured reporters from the country's largest newspaper that there was 'nothing unusual' going on in the prison known locally as the Cathedral, Pablo Escobar and nine of his top men managed to slip past more than 200 soldiers, through a hole in the fence and off into the night was unexpected but not really that difficult to believe.

Similar, more recent revelations that the maximum security prison counted water beds, jacuzzis, sophisticated communications equipment -faxes and cellular telephones- and caches of weapons among its features, were not altogether surprising.

Instead, they highlighted the failure of an official policy of 'looking the other way' and confirmed what many had suspected since Escobar surrendered to authorities last June.

This laissez-faire policy of turning a blind eye to illegal activities as long as they do not threaten the power and privileges of the country's political elite is not new.

In the late 1970's and early 80's, for example, it permitted Escobar and his allies to consolidate much of their present day criminal enterprise and, to a large extent, continues today to be the case with members of the ruthless but business-like Cali cartel.

Paramilitary groups, aided and abetted by the army, have also benefitted from this policy, multiplying, establishing strongholds and acting with impunity throughout the Colombian countryside.

Stopping drug related violence and terrorism, not drug production an trafficking, has always been the primary concern of successive Colombian governments. Consequently, getting Escobar behind bars - regardless of what he does from behind them - is the overriding objective of the present administration's national drug policy.

In possession of what the Attorney General calls 'irrefutable proof' that Escobar not only continued to run business from jail but was also directly responsible for a rash of kidnappings and murder in Medellín (a settling of accounts according to local newspapers) in June and, above all, under pressure from the DEA and the international community, the government was, in effect, forced to act against Escobar.

Since the escape, this same argument has justified hundreds of raids and arrests, as the population is considered suspect and victimized.

It is difficult to predict what will happen next. The 'official' versions of what has already happened as well as the flights of U.S. planes and personnel over the area, are contradictory. It is likely, though, that unless the DEA or his enemies get to him first, we will see another round of negotiations designed to get Escobar back in prison.

Until the United States and other consumer countries around the world somehow find a way to curb their voracious appetite for drugs, however, Pablo and the dozens of other faceless Escobars in his shadow, will likely continue to do business as usual.

TELECOM, A STONE IN THE SHOE OF PRIVATIZATION

Communications is today one of the most strategic sectors of the national economy. To be competitive, it needs to stay at the cutting edge of information and telecommunications technology, both of which are essential to the process of industrial reconversion and transnationalization on which the country has embarked.

Communications is the motor which moves most of the country's transnational subsidiaries as well as many of the nation's largest companies in the financial and international trade sectors. Telecom (Telecommunications of Colombia) is the vehicle which has mobilized information vital to these enterprises. The recent strike of Telecom workers showed just how vital communications are and how they can have a direct effect on the country's economy. Since then, the government has emphasized the need to have at least two information transmission systems in the country and talked of doing away with this state-run monopoly by offering it up to private, multinational interests.

Telecom workers, including technicians and engineers, are the representatives of a new proletariat. Threatened with the privatization of their company, they acted with resolve, called a momentous strike and paralyzed a significant portion of the country's activities. The government, for its part, responded by mobilizing public opinion against the workers.

Because the strike did not manage to fully articulate workers opposition to the government's economic 'opening' (apertura) and privatization policies, however, a golden opportunity was lost. Both the crisis in the worker's movement and the distance many of its organizations have maintained from Telecom workers are to blame for this. Nevertheless, the conflict did manage to rally opposition to the government's plans to privatize Telecom from a number of diverse sectors of the country, in large measure because of the company's profitmaking capacity as well as a number of less than encouraging examples from similar experiences in other Latin American countries.

Although the conflict did manage to slow the privatization process down somewhat, steps have already been taken to establish a number of mixed enterprises with foreign capital - cellular telephones, for example- and plans are underway to set up a private information transmission network. For these and other reasons, on more than one occasion the Telecom union has accused the government of failing to honor the agreements which ended the strike.

This national panorama is part of an international competition between transnationals for control of the communications sector in different countries. More than a simple competition between companies, however, it also involves the countries supporting them as each, in spite of the much publicized offer of efficiency and increased access to free markets, seeks to impose conditions as part of the package.

CORRUPTION AND POLITICAL REGIME

become structural components of our social and political reality.

But because people will only put up with so much for so long, the Colombian political regime entered into crisis. Faced with the demands of

Throughout the first half of the year, we have seen a proliferation of reports in the news media, focussing on the phenomenon of official, government corruption. According to the Colombian Association of Public Administrators (A.C.A.P.), "in the last two years, almost two thousand investigations have been initiated into the so-called illicit enrichment of high-ranking government officials", of which no more than a hundred have come to trial.

We have also witnessed the verbal 'give and take' between the Congress, the Inspector of the National Treasury and the Attorney General over the issue of the so-called 'auxilios' or parliamentary discretionary funds.

According to a June 13 article by columnist Juan Diego Jaramillo in the newspaper, *El Tiempo*, "if reporters dug a little deeper, they would discover all of the Congress's political foundations which, since the middle of last year, have lined their pockets with more than \$50 million dollars."

To say nothing of the well-publicized case of Juan Martín Caicedo Ferrer, the former mayor of Santa Fe de Bogotá and his councillors, all of whom are under investigation for the same reason. Could this really be the beginning of a moralizing wave in the government's administration?

Colombia is a country of profound economic, social and cultural inequalities. Its political regime, constructed within this reality, rests on a foundation of political patronage and authoritarianism. With the mediation of the two traditional parties, patronage has become the predominant form of social relations by which the State integrates diverse social expectations or, more precisely, those which can be integrated; those which cannot, are simply excluded or repressed.

This has given rise to a variety of practices and customs which have resulted in a situation of generalized corruption. To most people, politics is seen as a business, a notion which, has spread throughout society. The 'sharpster', the individual who uses any means to get ahead and the bag of 'dirty political tricks' have all become everyday occurrences; they all play a part in the country's cultural disintegration and contribute to the destruction of its social fabric.

Corruption and violence are twins. Patronage, by definition, is a practice which has it brings a portion of the population together simultaneously marginalizes another, condemning it to silence.

Similarly, impunity engrains itself into such a regime. Not surprisingly, corruption, violence and impunity have all

international capitalism, an internal economic crisis and a worsening of the country's social and political conflict, the need to re-arrange the regime became evident. It is this process which is presently underway in the country.

It is taking place within a framework of repression and disorganization of the country's most radical social sectors and involves an attempt to co-opt moderate sectors and some segments of the middle class. In this way, the dominant elites hope to 'wipe the slate clean', establish new rules and continue sharing power as before.

It is for these reasons that attempts to convict those corrupt individuals have so far been simply that-attempts. In this regard, all politicians have 'feet of clay' and are vulnerable.

The list of those involved in handing out discretionary funds through the Colombian Institute of Educative Credit and Technical Studies abroad, ICETEX, which the National Treasury Inspector made public is telling: on it are the names of almost all of the country's professional politicians. No less significant, is the manner in which the incident is being kept quiet.

This re-arrangement has not ended and the struggle continues between those who think that patronage must be controlled and the country 'modernized', and those who want to continue as before.

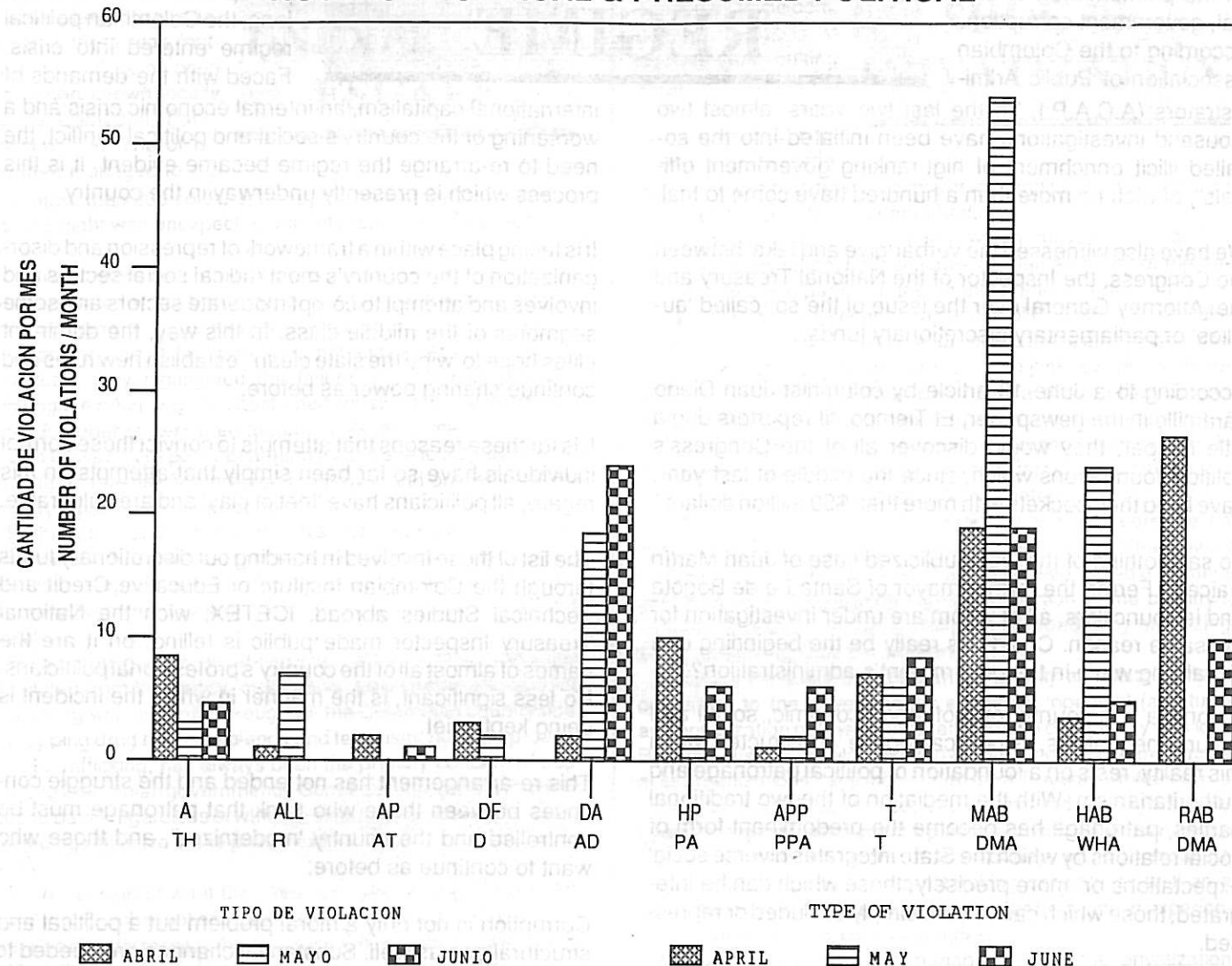
Corruption is not only a moral problem but a political and structural one as well. Substantial changes are needed to eradicate it and for them to take place a truly participative society must be constructed.

In other words, it is essential that the country's popular, democratic sectors participate effectively in deciding the future course of the nation. And here we are not simply speaking of the type of participation that is so widely bandied about today; that which limits itself to information and opinion, constituting participation's primary level and implying only co-optation and integration. We mean that participation which translates into decision, action and intervention.

To achieve it, society must take the control of the decision-making process and the monopoly of politics out of the hands of the country's professional politicians.

VIOLENCE REGISTERED IN ANTIOQUIA

VIOLENCIA POLITICA Y PRESUNTAMENTE POLITICA VIOLENCE-POLITICAL & PRESUMED POLITICAL



VIOLENCIA POLITICA Y PRESUNTAMENTE POLITICA				VIOLENCE-POLITICAL & PRESUMED POLITICAL					
		ABRIL	MAYO	JUNIO		APRIL	MAY	JUNE	
A	AMENAZAS	8	3	4	TH	THREATS	8	3	4
ALL	ALLANAMIENTO	1	6	0	R	RAIDS	1	6	0
AP	ATENTADO POLITICO	2	0	1	AT	ATTEMPTED POLITICAL ASSASS	2	0	1
DF	DESAPARICION FORZADA	0	3	2	D	DISAPPEARANCES	0	3	2
DA	DETENCION ARBITRARIA	2	18	24	AD	ARBITRARY DETENTION	2	18	24
HP	HOMICIDIO POLITICO	10	2	6	PA	POLITICAL ASSASSINATIONS	10	2	6
APP	H. PRESUNTAMENTE POLITICO	1	2	5	PPA	PRESUMED POLITICAL ASSASS	1	2	5
T	TORTURA	6	5	8	T	TORTURE	6	5	8
MAB	MUERTO EN ACCION BELICA	19	53	19	DMA	DEATHS IN MILITARY ACTIONS	19	53	19
HAB	HERIDO EN ACCION BELICA	3	24	4	WHA	WOUNDED IN MILITARY ACTIONS	3	24	4
RAB	RETENIDO EN ACCION BELICA	26	0	11	DMA	DETAINED IN MILITARY ACTIONS	26	0	11
SUB TOTAL		78	116	84	SUBTOTAL		78	116	84